

entre los que no se encuentra el decreto de convocatoria y que fíjara los días en que debieran hacerse las elecciones populares en los seis Distritos del Estado.—Por las razones y fundamentos expuestos se declaró: 1º. Que se confirma la sentencia del Juzgado de Distrito de Querétaro de 12 de Febrero de 1873, que dice: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Escribano Mariano Llanas Puente, contra el acto del Tribunal Superior del Estado que lo suspendió por tres meses en el ejercicio de su profesion.—Devuélvase sus actuaciones al juzgado de Distrito de donde proceden con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.—Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron. *Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—P. Ordoz.—Ignacio Ramirez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Juan A. Mateos*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 9 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por D. Francisco Ortoll, contra una providencia de la 1ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que mandó cesar los procedimientos ejecutivos que se seguían contra los antiguos acreedores del mismo Ortoll, sobre devolución de una casa y sus rendimientos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Fiscal ha examinado detenidamente las constancias que acompaña á su informe la primera Sala del Tribunal Superior del Estado, que conoce del asunto á que se contraen estos autos, y de ellas resulta justificado, que habiendo sentenciado el inferior un juicio de cuentas, sobre la administracion de una casa mandada entregar al C. Francisco Ortoll, el apoderado de los acreedores apeló del fallo, y admitido el recurso en el efecto devolutivo, entabló el de denegada apelacion, presentándose á la superioridad con el certificado que las leyes ordenan en tales casos; pero dicho apoderado suplicó á la Sala pidiese los autos originales, alegando que el certificado no estaba exacto porque adolecia de omisiones de hechos importantes de que hizo mencion, que debían tenerse presentes para la calificacion del grado; y que ademas, todo juicio de cuentas es por su naturaleza ordinario, conforme á las leyes y á las doctrinas de los prácticos. El Magistrado accedió á esta solicitud, librándose un despacho ó compulsorio al inferior para que los remitiése, como en efecto los remitió despues de haber opuesto alguna resistencia.

Radicados en la Sala dichos autos, quedó paralizado el negocio, hasta que entró á desempeñarla el Magistrado supernumerario D. Gerardo Campos, en sustitucion

de D. Justo Paz que fué el Magistrado que conoció desde su principio del referido asunto; y el nuevo Magistrado dispuso se devolviesen al inferior, sin ocuparse del objeto con que se pidieron ni del recurso pendiente. En virtud de gestiones hechas por el representante de los acreedores, quedó inhibido Campos del conocimiento del mencionado asunto, sustituyéndolo el C. Adolfo Castañares, como el llamado por la ley; y este, notando la contradicción que existía en los procedimientos de sus antecesores, decretó: que se reuniesen todos los antecedentes y se pasasen á consulta de un asesor, para que lo ilustrase en la cuestión y le aconsejase la providencia que correspondiese conforme á derecho, y que mientras, el inferior suspendiese todo procedimiento.

El Fiscal considera que con la expresada providencia, no se ha violado ninguna garantía individual de las comprendidas en el artículo 14 de la Constitución, supuesto que el Magistrado en uso de sus atribuciones legales, ocurrió á un perito en la ciencia del derecho para que le marcara el camino que debía seguir, vista la oposición que existía en los autos de sus antecesores, que como legos quizá uno ú otro se había equivocado, y lejos de existir esa violación de las garantías individuales, el Magistrado procuró evitárlas con el nombramiento de asesor. A virtud de los fundamentos expuestos, el Fiscal concluye pidiendo á V. se sirva sentenciar que no ha lugar al amparo que solicita el C. Francisco Ortoll, quien tiene expedida y en ejercicio su acción ante los Tribunales del Estado para obtener el remedio de los agravios que alega se le han inferido.

S. Juan Bautista, Setiembre 4 de 1872.
—*Francisco Vidaña.*

Es copia que certifico. S. Juan Bautista
Octubre 10 de 1872.—*Gabriel Sosa, secretario.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Juan Bautista, Octubre 8 de 1872.
—Vistos estos autos de amparo promovidos por el Ciudadano Francisco Ortoll, contra una providencia de la primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado; de las exposiciones de las partes y de los justificantes aducidos, resultan los hechos siguientes. —Habiendo litigado dicho Sr. Ortoll contra sus acreedores por la devolución de una casa con pago de sus rendimientos por el tiempo que indebidamente la detentaron, obtuvo sentencia favorable en primera y segunda instancia, siendo la última pronunciada en ocho de Mayo de mil ochocientos sesenta y nueve, ejecutoriada en 29 de Julio de 1870. —Pasado este fallo al Juzgado de primera instancia para su ejecución, este procedió á su cumplimiento, concediendo á los acreedores el término de un mes para presentar las cuentas de rendimientos. Exhibidas que fueron, y oída la parte ejecutante, se pronunció el auto con fecha trece de Marzo de mil ochocientos setenta y uno, haciendo en las dichas cuentas, las reducciones y rectificaciones que el inferior creyó de justicia, y disponiendo que conforme á ellas, la escribanía procediese á estender la liquidación de la cantidad exigible en favor del Sr. Ortoll. —Apelado este auto, no se admitió el recurso mas que en el efecto devolutivo, por lo cual el apoderado de los acreedores interpuso el recurso de denegada apelación. Corridos los trámites respectivos y á virtud de ocursu del Ciudadano Lic. José María Cordera, apoderado de los acreedores, la primera Sala del Tribunal Superior desempeñada por el Ciudadano Justo de Paz, decretó con fecha veintiocho de Setiembre de mil ochocientos setenta y uno, un auto conteniendo dos puntos: en el primero se manda que el inferior remita á la Superioridad los autos de concurso á bienes del Sr. Ortoll, y en el segundo, se ordena la suspensión de todo procedimiento hasta la determinación del recurso. —Parece que el ne-

gocio permaneció en tal estado sin haberse dado mas trámites para la sustanciación, hasta que en dos de Julio último á petición del ejecutante, la misma primera Sala á cargo ya del Ciudadano Gerardo Campos, dispuso la devolución de los autos al inferior para continuar la ejecución, insistiendo en lo mismo, por auto de doce del propio mes. —Interpuesta recusación del C. Gerardo Campos, este, con fecha treinta del mismo Julio se separó del conocimiento del asunto, por varias razones, suplicando al Tribunal admita su excusa. —El Tribunal pleno en acuerdo de cinco de Agosto declaró magistrado de la primera Sala, al C. Adolfo Castañares, por varias consideraciones que son de verse en la compulsa de fôjas cinco, y con la misma fecha el nuevo magistrado expidió un auto sometiendo á consulta los procedimientos sobre el recurso de denegada apelación con que se le dió cuenta, y á la vez disponiendo la suspensión de los procedimientos ejecutivos del inferior, cuya providencia es la que dió motivo al amparo solicitado por el Sr. Ortoll. —Todo el fundamento legal de este es el segundo concepto del artículo catorce de la Constitución federal. El tenor literal de este artículo es como sigue: «No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho, y exactamente aplicadas á él por el Tribunal que previamente haya establecido la ley.» —Antes pues, de entrar en el exámen de si el Sr. Castañares ha cometido ó nó las infracciones de la ley que le imputa el promovente, es preciso establecer primero: si es procedente la aplicación del segundo concepto del citado artículo catorce al caso de que se trata, como fundamento legal del amparo que se solicita. Segundo: si segun el carácter que el que lo promueve representa en el juicio originario, puede considerarse favorecido por dicho artículo. Tercero: si la calidad del asunto da lugar al amparo. —En cuanto al primer punto, este Tribunal considera que no es admisible en el

buen sentido la muy lata inteligencia en que el promovente hace uso del citado concepto. De tomarlo así, se seguirían numerosos inconvenientes tan obvios y perceptibles que no es posible so hayan ocultado á la perspicacia del legislador. A entenderlo con tal amplitud, toda infracción verdadera ó supuesta de la ley, de parte de cualquiera autoridad, hará caso de amparo; tendrá lugar en cualquier estado del juicio; desde la sentencia definitiva hasta el auto de trámite, todas las providencias judiciales estarán sujetas á la intervención federal por la vía del amparo; no habrá cosa juzgada ni pleito acabado; todos los recursos creados por las leyes de procedimientos para asegurar á los litigantes contra los errores de los jueces, vendrán á ser inútiles, puesto que el medio del amparo les prestará un camino mas breve y seguro para encadenar á su arbitrio los procedimientos; en un mismo asunto, ambas partes podrán usar del propio remedio y no es un caso imposible que una y otra tenga justicia. Por ejemplo, en el que aduce el Sr. Ortoll, es muy posible que el magistrado Castañares haya dictado la providencia reclamada con infracción de algunos artículos de la ley reglamentaria de justicia; pero tambien lo es que la de su antecesor Campos, revocada por él, se resienta de otras infracciones, y de este modo ambos contendientes habrán podido usar del amparo en sentido contrario, lo que es absurdo. En una palabra, entendido con esa latitud el texto constitucional, los actos de todos los funcionarios y autoridades, por mas que se ciñan á la órbita de sus atribuciones y respeten las garantías individuales, la libertad, la propiedad, los derechos del hombre y del Ciudadano, nunca estarán exentos de la censura de una autoridad extraña, censura que, con referencia al orden judicial, es verdaderamente incompatible con la independencia de esta ramificación del poder público. En vista de tales inconvenientes y otros muchos que sería prolijo enumerar, este Tribunal entiende que el precepto

constitucional del artículo catorce está esencialmente en su primer concepto, es decir, en la prohibición de la ley retroactiva, principio que desde el origen de nuestro ser político han venido consignando todas nuestras leyes fundamentales. La segunda parte no viene á constituir otro precepto por separado, sino que debe entenderse como una explicación ó escolio de la primera. Por lo menos hay bastante motivo para considerar dudoso el sentido de la ley y abstenerse de su aplicación hasta que el legislador aclare su inteligencia, ó hasta que las providencias superiores fijen su sentido.—En orden al segundo punto, suponiendo aplicable la citada segunda parte al caso en cuestión, las palabras de la ley: «Nadie puede ser juzgado ni sentenciado &c.» parecen indicar, que el amparo compete al reo y no al actor, porque es al primero y no al segundo á quien se trata de juzgar y sentenciar.

En el juicio de que ha provenido el amparo, los acreedores del Sr. Ortoll, demandados por él por la devolución de una casa y sus rendimientos, y ejecutados actualmente por virtud de la sentencia que los condena, son los que hacen de parte reo. Limitado pues, de esta manera, como parece deber serlo, el sentido del segundo miembro del citado artículo constitucional, no sería al Sr. Ortoll á quien competiese la acción de amparo, sino á sus acreedores.—En cuanto al tercer punto, ninguna duda puede caber en la resolución. El artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869, excluye terminantemente el amparo en negocios judiciales, como lo es en toda evidencia el de que proviene la promoción del Sr. Ortoll en demanda de este beneficio.—En virtud pues, de las consideraciones que preceden, con fundamento del artículo que se acaba de citar y salvos los derechos del promovente para usar de los recursos y remedios que las leyes locales y generales ponen á su disposición, el tribunal decreta. Primero: la Justicia de la Unión no ampara ni protege

al C. Francisco Ortoll contra la providencia dictada en 5 de Agosto último por el C. Adolfo Castañares, magistrado de la primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el punto en que manda cesar los procedimientos ejecutivos contra los acreedores del mismo Sr. Ortoll. Segundo: remítanse los autos á la superioridad para que se sirva determinar lo que á bien tenga, sacándose las copias de estilo. Lo proveyó el C. Lic. Limbano Correa, Juez de Distrito del Estado y firma conmigo su escribano que doy fé.—*Limbano Correa.*—Ante mí,—*Gabriel Sosa.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Octubre 10 de 1873.—*Gabriel Sosa.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 17 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Tabasco por D. Francisco Ortoll, contra la resolución dictada el 5 de Agosto de 1872, por el Magistrado que forma la 1ª Sala del Tribunal Superior de aquel Estado, que mandó cesar los procedimientos ejecutivos que se seguían contra los antiguos acreedores del mismo Ortoll, sobre devolución de una casa y sus rendimientos; alegando que con tal resolución se viola en su persona la garantía que le otorga el artículo 14 de la Constitución en su segunda parte; y considerando:—1º Que el Tribunal que dictó la resolución reclamada es inquestionablemente el que las leyes del Estado tenían previamente establecido.—Segundo: Que en cuanto á la exactitud con que el expresado Tribunal haya aplicado las leyes en su resolución de 5 de Agosto, como esta se encuentra pendiente del recurso de revocación por contrario imperio que ya intentó el quejoso, y de los demás que puede intentar, los que no se sabe si confirmarán, modificarán ó revocarán la sentencia; no puede decirse todavía que haya un acto deter-

minado que se ejecuta ó trata de ejecutarse, que es cuando procede el amparo.—Por tales razones y fundamentos se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito de Tabasco cuya parte resolutive es como sigue: “La Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Francisco Ortoll contra la providencia dictada en cinco de Agosto último por el C. Adolfo Castañares, Magistrado de la 1ª Sala del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, en el punto que mandó cesar los procedimientos ejecutivos contra los acreedores del mismo Sr. Ortoll.”—Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de donde proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.—Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Juan A. Mateos*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 16 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el Lic. Ramon de Armas en representacion de varios ciudadanos, contra la orden del Ministerio de la Guerra por la que fueron consignados al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El jefe de hacienda, promotor fiscal sustituto, dice:—Que en el informe que ha rendido el C. comandante militar de esta plaza, obran los datos necesarios para que la justicia federal ampare á los individuos que han sido consignados al servicio de las armas, por los cuales se ha establecido este juicio. No se supone en dichos individuos delito alguno comun; el que se les imputaba es puramente político, y no solo por la ley de amnistía sino porque la consignacion al servicio militar se hizo sin previo juicio, sin audiencia de los condenados y sin que autoridad competente la decretara, es de accederse al amparo. El Ministerio de la Guerra fué el que dispuso la consignacion, sin expresar, como se ve á fojas 6, que fuese por orden del C. presidente y en uso de las facultades extraordinarias que le estaban conferidas; por consiguiente no habia autoridad en el Ministerio para la consignacion; pero aun habiéndola, faltó el previo juicio, faltó la defensa de los consignados, y claro es que se violaron las garantías que señalan los artículos 5, 13, 16, 18, 19 y 20 de la constitucion federal. A todo esto se añade la consideracion de que los favorece la ley de amnistía, y en tal virtud el que suscribe pide, que por sentencia definitiva se declare que la justicia de la federacion ampara á los CC. Juan Onorio, Pascual Medel, Agustin Perez, Juan Limon, Felipe Pereira, Miguel Rosas, Bonifacio Chiquil, Antonio Armas, Ramon Huérfano, Leonar-